



Consejo de Seguridad

Distr. general
23 de junio de 2020
Español
Original: francés e inglés

Carta de fecha 23 de junio de 2020 dirigida al Secretario General y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por el Presidente del Consejo de Seguridad

Tengo el honor de adjuntar a la presente una copia de las exposiciones informativas de la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Sra. Helen La Lime, y del Presidente de la Federación de Abogados de Haití, Sr. Jacques Létang, así como de las declaraciones formuladas por los representantes de Bélgica, la República Dominicana, Estonia, Francia, Indonesia (en nombre de Indonesia y Viet Nam), San Vicente y las Granadinas —en nombre de los tres países africanos que son miembros del Consejo de Seguridad, a saber, el Níger, Sudáfrica y Túnez, así como de San Vicente y las Granadinas—, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, en relación con la videoconferencia sobre la cuestión relativa a Haití convocada el viernes 19 de junio de 2020. El representante de Haití también formuló una declaración.

De conformidad con el procedimiento establecido en la carta de fecha 7 de mayo de 2020 dirigida a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo (S/2020/372), acordado a raíz de las circunstancias extraordinarias relacionadas con la pandemia de la enfermedad por coronavirus, las exposiciones informativas y las declaraciones se publicarán como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Nicolas **de Rivière**
Presidente del Consejo de Seguridad



Anexo I**Declaración de la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Helen La Lime**

[Original: francés e inglés]

Deseo darle las gracias, Sr. Presidente, por haberme concedido una vez más el privilegio de informar al Consejo de Seguridad sobre la evolución de la situación en Haití.

Como la mayor parte del mundo, en la actualidad, Haití se centra en hacer frente a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Si bien el número confirmado de personas infectadas y muertes palidecen en comparación con algunas cifras de los demás países de América, la pandemia somete a una dura prueba al sistema de salud de por sí frágil de este país, así como a su exigua red de seguridad social.

Han transcurrido tres meses desde que el Presidente Jovenel Moïse declaró la emergencia sanitaria tras la confirmación de los primeros casos de coronavirus, y las autoridades siguen enfrentando grandes dificultades para abrir centros médicos dedicados al tratamiento de los pacientes de COVID-19. Haití, un país de más de 11 millones de habitantes, hoy en día solo tiene capacidad para tratar a unos pocos cientos de pacientes a la vez, aunque cada día quedan libres más camas. Esta situación obedece en parte a una coordinación que dista mucho de ser óptima en el seno del aparato del Estado tanto a nivel nacional como local, así como a una financiación insuficiente del plan de respuesta nacional. También es el resultado de la oposición en un principio firme de las comunidades locales a la apertura de estos centros en ellas, lo cual pone de manifiesto el persistente clima de negación, estigmatización y discriminación que existe en el país.

La pandemia, cuya propagación se aceleró en el curso del último mes, según datos oficiales, hasta la fecha ha afectado a más de 4.900 personas y ha causado 84 muertes. Aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor, sus efectos comienzan a sentirse entre las ciudadanas y los ciudadanos de Haití que, en su mayoría, ya vivían en condiciones socioeconómicas precarias. Como resultado de las múltiples crisis interconectadas que han afectado al país en los últimos años, la economía de Haití se contrajo un 1,2 % en 2019, y se prevé que se reduzca un 4 % más este año. Las fábricas funcionan a capacidad reducida debido a la necesidad de aplicar medidas para frenar la propagación del virus. Se vislumbra un mayor aumento del desempleo; la gourde sigue perdiendo valor frente al dólar de los Estados Unidos; y la inflación supera el 20 % de manera sistemática. Ante la falta de recursos suficientes para apoyar la salida de Haití de la recesión en que está sumido, se corre el riesgo de que se anulen los logros en materia de seguridad y desarrollo alcanzados tras arduos esfuerzos a lo largo del pasado decenio y medio, y un problema inicialmente interno podría convertirse en un problema regional si la situación humanitaria de por sí alarmante sigue empeorando y un número cada vez mayor de haitianas y haitianos se ve tentado a buscar mejor suerte en el extranjero.

Desde la última vez que me dirigí al Consejo (véase S/PV.8729), Haití se ha beneficiado de un entorno político relativamente en calma. El agotamiento causado por 18 meses de movilización popular contra el Presidente Moïse y el inicio de la pandemia de COVID-19 han llevado a parte de la oposición a pedir a las haitianas y los haitianos que se unan para hacer frente al virus, iniciativa que ha permitido gobernar al recién nombrado Primer Ministro Joseph Jouthe. Sin embargo, los primeros indicios de la intención del ejecutivo de iniciar los preparativos para las

elecciones legislativas y locales, esperadas desde hace mucho tiempo, han despertado las pasiones y agudizado la acritud en el discurso público y el debate político.

En las últimas semanas, se ha registrado un notable aumento de la frecuencia e intensidad de los enfrentamientos entre bandas armadas rivales que se disputan el control de mayores extensiones de territorio en los barrios más poblados de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, con el fin de influir en el resultado de las elecciones en esos distritos electorales. Un número cada vez mayor de figuras de la oposición se oponen a la duración del mandato del Presidente Moïse y exigen que se establezca una administración de transición, que supuestamente iniciaría reformas y organizaría los próximos comicios. El círculo vicioso de desconfianza, recriminación y, en última instancia, de violencia comienza una vez más a definir la dinámica de la política haitiana en un momento en que toda la sociedad debería estar unida en su respuesta a la pandemia y esforzarse por sentar las bases más virtuosas y perdurables sobre las cuales construir su futuro.

Desde hace mucho tiempo, Haití ha recurrido a acuerdos convenientes para abordar los problemas políticos, en detrimento de los principios que sustentan su Constitución. Sin embargo, las ambigüedades de esta Constitución, que no pueden interpretarse con autoridad a falta del Consejo Constitucional previsto en su texto, han obligado de manera sistemática a los agentes políticos a soslayarla. Se evidencia cada vez más que es preciso reformar la Constitución para eliminar esta incongruencia y crear las condiciones propicias para la estabilidad institucional, la buena gobernanza y el estado de derecho, tres características indispensables para que el país pueda prosperar. Esta reforma solo podrá tener éxito si se lleva a cabo un proceso de titularidad nacional, que armonice un liderazgo sólido con esfuerzos genuinos de todos los agentes para dejar de lado los intereses políticos a corto plazo.

En los últimos cuatro meses, a pesar de la pandemia, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), trabajando en colaboración cada vez más estrecha con el equipo de las Naciones Unidas en el país, no ha perdido de vista los seis objetivos, las prioridades que ha establecido mediante el marco estratégico integrado. No ha escatimado esfuerzos para ayudar a las autoridades e instituciones haitianas a examinar las cuestiones fundamentales que impiden forjar un consenso nacional, así como para ayudar al país a avanzar hacia la estabilidad y el desarrollo sostenible. Mediante sus buenos oficios, la Oficina ha seguido alentando a los agentes de todo el espectro político a entablar un diálogo constructivo. De manera conjunta con sus asociados, ha asesorado a la Policía Nacional de Haití sobre la solución satisfactoria de controversias laborales que desde hace mucho tiempo han afectado gravemente sus filas y ha ayudado a los agentes judiciales a concebir un sistema de audiencias virtuales, que permitirá a los tribunales seguir funcionando a pesar de la imposibilidad actual de que se reúnan en formato presencial

Aunque estas actividades son limitadas, contribuirán a potenciar la cohesión de la fuerza policial del país, que mantiene el orden y combate las acciones de las bandas armadas, y a que el sistema judicial siga siendo capaz de cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. Lamentablemente, seguimos operando en un contexto en el que la defensa del principio de la rendición de cuentas sigue siendo un reto fundamental, como lo demuestran la falta de progresos en la investigación y las actuaciones judiciales en las recientes causas emblemáticas de Lilavois, Grand Ravine, La Saline y Bel-Air, que se refieren a violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos por miembros de bandas, agentes del orden y responsables políticos.

En colaboración con la sociedad civil, la BINUH seguirá esforzándose por alentar a las autoridades a que intensifiquen la lucha contra la impunidad y la promoción de los derechos humanos. Mediante el uso racional del conjunto de

instrumentos de que dispone, el sistema de las Naciones Unidas en Haití seguirá respaldando la expansión de los múltiples aspectos de la respuesta a la COVID-19, apoyando al país en el camino de la crucial reforma institucional y económica y prestando asistencia para garantizar la celebración oportuna de elecciones libres, justas y transparentes, en un clima apaciguado.

Para asegurar el éxito de esos esfuerzos y abordar las causas fundamentales de su inestabilidad de manera significativa y sostenible, Haití depende del pleno apoyo del Consejo, así como de la participación continua de los asociados internacionales. Ambos son muy apreciados.

Anexo II

Declaración del Presidente de la Federación de Abogados de Haití, Jacques Létang

[Original: francés e inglés]

Tengo el placer de hacer uso de la palabra para aportar una clarificación sobre la situación en Haití en mi doble calidad de Presidente de la Federación de Abogados de Haití y miembro de la Oficina de Derechos Humanos de Haití.

La epidemia de la enfermedad por coronavirus ha tenido un profundo impacto en el mundo. Haití no se ha librado de esa marea, que ha comportado una combinación de riesgos para la salud, una prueba de fortaleza institucional y una crisis económica. Los servicios públicos están, en la práctica, fallando. Los derechos más básicos no están garantizados, mientras que la depreciación de la gourde y la temporada de huracanes ponen en peligro directo la vida de millones de haitianos que ya padecen inseguridad alimentaria. La rápida propagación del virus es particularmente preocupante en las cárceles, donde las condiciones siguen deteriorándose. Los planes de contingencia y descongestión anunciados por las autoridades no se han aplicado hasta ahora.

El Estado está perdiendo cada vez más su monopolio de violencia legítima. Numerosos barrios populares se están transformando en zonas sin ley, en las que la vida de todos está sujeta a la merced de bandas cada vez mejor armadas y organizadas. La mayoría de las instituciones públicas ubicadas en el centro de Puerto Príncipe están desiertas. Los bandidos armados hacen huir periódicamente del Palacio de Justicia a las autoridades, responsables de garantizar el orden público. El Estado controla cada vez menos el territorio, inclusive en las provincias, y uno se pregunta a veces incluso si no ha perdido el control de la policía, cuyas exigencias se han expresado repetidamente con violencia.

Las violaciones masivas de los derechos humanos están en alza. El caso de La Saline es, sin duda, una de las masacres más graves de nuestra historia contemporánea; lamentablemente, no es el único. Más de 71 personas fueron asesinadas en la noche del 13 de noviembre de 2018, y decenas y decenas más han sido asesinadas desde entonces, sin contar las mujeres que fueron violadas en serie, las casas incendiadas, los centenares, si no miles, de personas desplazadas, los cuerpos carbonizados abandonados en las calles. Se trata de una generación abandonada que ahora se está iniciando en la más dura de las crueldades.

El problema es principalmente un problema de impunidad. A pesar de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2019, ya no hay ni siquiera una investigación, ya que la causa está bloqueada desde hace meses a nivel del Tribunal de Casación. Este es el mensaje claro que el Estado envía a las víctimas que ponen su vida en peligro al presentar una denuncia: a nivel nacional e internacional, no recibirán ni protección ni justicia. La cuestión de la participación de las autoridades en la perpetración de esas atrocidades se plantea en numerosos informes, incluido el de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití y el más reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) sobre la masacre de Bel-Air. Esas acusaciones son sumamente graves, pero no se hace nada.

Es esa misma impunidad la que dificulta la lucha contra la corrupción. A pesar de la movilización ciudadana y de los edificantes informes publicados por el Tribunal de Cuentas sobre el despilfarro y la malversación de miles de millones de dólares, sigue siendo poco realista esperar que se organice un proceso de PetroCaribe.

Esas deficiencias están estrechamente vinculadas a la disfunción del sistema de justicia. La detención arbitraria es la norma. A los acusados no se les garantiza el acceso a un magistrado, y a resultas de ello pasan años en la denominada prisión preventiva prolongada. Tampoco se garantiza el acceso a un magistrado a las víctimas, en primer lugar y ante todo las de la violencia por razón de género, que muy a menudo son silenciadas. El Consejo Superior del Poder Judicial no ha estado a la altura de su función disciplinaria. El proceso de certificación no se ha llevado a cabo nunca, y los mandatos de los magistrados se renuevan a voluntad del ejecutivo. Lejos de encarnar la renovación de un poder judicial independiente, ese órgano colegiado se ha empantanado en la instrumentalización política y en un corporativismo orientado a la defensa de malas prácticas, en primer lugar el incumplimiento de la tarifa judicial. Con su llamamiento a una nueva huelga que paralizará de nuevo el sistema, los magistrados han denunciado el ridículo porcentaje otorgado al poder judicial en el último presupuesto nacional.

El proceso electoral se ha pervertido profundamente. Aún no se han creado ni el Consejo Constitucional ni el Consejo Electoral Permanente, lo que ha dado lugar a innumerables casos de ajustes institucionales. Lejos de forjar la democracia, las elecciones generan, ante todo, injerencia, violencia e instrumentalización del poder. No permiten establecer un vínculo de confianza entre el pueblo y sus dirigentes.

Ahora más que nunca, nos encontramos en un punto muerto político. Ya no hay parlamento, ya no hay autoridades locales, ya no hay Gobierno legítimo. El Presidente declaró que las instituciones cuya continuidad tenía la obligación de asegurar habían caducado. La legislación se adopta ahora por decreto, sin ninguna consulta. La ausencia de un sistema de equilibrio de poderes se sigue agravando con la prolongación del estado de emergencia, que pone en peligro el respeto de las libertades individuales y suspende los procedimientos de contratación pública. Todas las miradas se dirigen ahora al final del mandato presidencial. Como suele ocurrir, la polémica se centra principalmente en la interpretación fluctuante de la Constitución. Hace casi un año que los haitianos experimentan el confinamiento que el mundo ha descubierto en los últimos meses. Todas las condiciones parecen haberse reunido para que volvamos a estar en un nuevo *peyi lòk* tan pronto como la epidemia termine.

Claramente, los objetivos fijados para la BINUH no se están cumpliendo. Si se consideran los recursos invertidos en los últimos decenios, el deterioro de la situación parece casi ininteligible. Las causas fundamentales de la inestabilidad no se han resuelto, al contrario, y uno se pregunta cómo los amigos de Haití permiten que haya tanta violencia y malversación. ¿No tienen los medios para hacer que el Estado rinda cuentas de sus compromisos, aunque sean solo los compromisos internacionales?

Cabe señalar que la BINUH ha heredado varios expedientes sensibles. La tragedia del cólera ha generado una gran desconfianza hacia las Naciones Unidas, que les ha costado mucho reconocer su responsabilidad, si no su culpa. ¿Qué hay de las reparaciones para las miles de víctimas? Aunque el Secretario General ha anunciado finalmente que quiere asumir la responsabilidad por el fracaso de la tolerancia cero en materia de abuso sexual, no se habla de condena penal ni siquiera disciplinaria, las medidas para establecer la paternidad y hacer cumplir los pagos de la pensión alimenticia siguen siendo hasta ahora abstractas. Yo mismo estoy ayudando a la afligida familia de un joven estudiante de secundaria que fue atropellado por un coche de las Naciones Unidas y a quien se le aseguraron años de una compensación que nunca llegó.

Garantizar el respeto de los derechos humanos y apoyar a un Estado débil son mandatos contradictorios. Al apoyar a un Estado, una misión vincula su destino al del Estado y corre el riesgo de perder la objetividad, aunque solo sea en la interpretación de los indicadores. ¿Y qué sucede cuando el propio Estado viola las

libertades fundamentales? Esa interrogante se planteó en enero de 2010, cuando los agentes de policía de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití no intervinieron para impedir que los agentes de la Policía Nacional de Haití dispararan a quemarropa contra detenidos indefensos en la prisión civil de Les Cayes.

La estrategia de apoyo internacional constante se debe cuestionar cuando se ponga en tela de juicio la fuerza de la voluntad nacional. Ese es el caso de la saga del diálogo nacional. Ese es el caso también del apoyo brindado al Consejo Superior del Poder Judicial o a las instituciones que se supone que combaten la corrupción, pero que, en cambio, lejos de ser independientes, han demostrado su voluntad de no adoptar ninguna medida para el cambio. El establecimiento del Consejo Nacional de Asistencia Jurídica es otro ejemplo. Los donantes han acogido con satisfacción la rápida instalación de una dirección interina supeditada al ejecutivo, pasando así por alto el establecimiento de la junta directiva prevista en la nueva ley. El último comunicado de prensa de la BINUH ha suscitado, por su parte, numerosas críticas. ¿Cómo apoyar, en ese contexto de vacío institucional, a un Gobierno cuestionado en la realización de una reforma constitucional?

La comunidad internacional está atrapada en un diálogo con cada Gobierno en el poder. Su apoyo parece depender más de intereses estratégicos que de medidas concretas en materia de derechos humanos. La necesidad de estabilización silencia la protesta popular, impidiendo así un contrapeso esencial a los excesos de poder y allanando el camino para verdaderas bombas de tiempo sociales.

No se puede pasar por alto a la sociedad civil haitiana. Lamentablemente, las Naciones Unidas consideran con demasiada frecuencia a las organizaciones militantes como meros operadores de proyectos, subcontratistas o defensores de la lógica burocrática. Sin embargo, deben desempeñar un papel indispensable de vigilancia de la democracia en una situación en la que cada día perdemos nuevos puntos de referencia. Hay que escuchar y apoyar a los agentes de la sociedad civil.

Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de dirigirme hoy al Consejo de Seguridad.

Anexo III

Declaración de la Misión Permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas

Agradezco al Presidente de la Federación de Abogados de Haití, Sr. Jacques Létang, y a la Representante Especial La Lime sus exposiciones informativas.

Bélgica apoya plenamente la labor de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití para facilitar el diálogo político en ese país. Es necesario que todas las partes se comprometan a entablar un diálogo inclusivo para responder a las crisis política, social, económica y humanitaria que afectan al país.

Desde nuestra última exposición informativa, hace solo cuatro meses (véase S/PV.8729), el mundo parece haber cambiado varias veces. Justo cuando la epidemia de cólera parecía erradicada, Haití fue afectado duramente por la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que agravó las numerosas vulnerabilidades del país. Apoyamos el papel de las Naciones Unidas en la asistencia al país para que responda a esa pandemia. También estamos colaborando arduamente con la Unión Europea para reorientar y priorizar nuestro apoyo a la lucha contra esta pandemia. Nos preocupan las denuncias de estigmatización y discriminación de las personas que supuestamente tienen COVID-19, incluso mediante linchamientos y destrucción de propiedades.

Alentamos a los agentes políticos a que aprovechen el impulso de la respuesta a la COVID-19 a fin de crear confianza y trabajen juntos para eliminar las causas fundamentales de la inestabilidad de Haití. Nos complace el anuncio del Presidente Moïse sobre la celebración de elecciones y su llamamiento a que se esclarezca el calendario electoral. Es necesario que se realice una reforma constitucional para que Haití pueda eliminar los niveles extremos de inestabilidad y polarización políticas.

El sentimiento generalizado de impunidad y falta de seguridad sigue siendo uno de los principales motivos de frustración de la población haitiana. Exhortamos a que se redoblen los esfuerzos por reformar el sector de la justicia, luchar contra la corrupción y fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. El elevado nivel de secuestros y asesinatos perpetrados por las bandas es sumamente preocupante. A ese respecto, es alentadora la finalización de la estrategia nacional de desarme, desmantelamiento, reintegración y reducción de la violencia comunitaria, así como la reactivación de la mesa redonda de la Policía Nacional de Haití con la sociedad civil. Para hacer frente a esos desafíos, es evidente que la Policía Nacional de Haití necesita un presupuesto creíble.

En cuanto a los derechos humanos, pedimos con carácter urgente que se avance para garantizar la rendición de cuentas por la violencia en Grand Ravine, La Saline, Bel-Air y, más recientemente, en Village de Dieu. Los autores de esos actos siguen evadiendo la justicia. Los avances registrados por la institución nacional de derechos humanos y la Inspección General de la Policía Nacional de Haití son alentadores. Pedimos que se apruebe y aplique el plan de acción nacional para los derechos humanos. También nos preocupa el derecho a la alimentación de los más vulnerables.

Haití no puede afrontar sus desafíos solo. Junto con nuestros asociados de la Unión Europea, estamos brindando apoyo financiero, técnico y político, y hacemos un llamamiento a todos los asociados internacionales a que sigan el ejemplo.

Anexo IV

Declaración del Enviado Especial de la República Dominicana al Consejo de Seguridad, José Singer Weisinger

Quisiera agradecer a la Representante Especial La Lime y al Sr. Jacques Létang sus exposiciones informativas. Las informaciones detalladas que nos han brindado son útiles para identificar las cuestiones fundamentales que afectan a Haití y allanar el camino para la próxima renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno de Haití para ayudar a la población y prevenir la propagación de la pandemia. Asimismo, encomiamos a todos los agentes políticos y a la sociedad civil haitiana por haber aunado esfuerzos para combatir ese flagelo.

A ese respecto, los Jefes de Estado de Haití y la República Dominicana se reunieron de manera virtual el 19 de mayo para examinar las sinergias en su respuesta a la pandemia. Los Ministros de Relaciones Exteriores de nuestros dos países también han celebrado periódicamente videoconferencias para examinar esa cuestión y otras de interés común.

Esperamos que esta pausa en el proceso político debido a la pandemia brinde algunas oportunidades para la reflexión y genere un impulso para que los dirigentes del país entablen un diálogo abierto e inclusivo que rompa el estancamiento político, y de ese modo permita la creación de una hoja de ruta y un calendario para los procesos políticos pendientes y futuros.

Además de los retos que plantea la pandemia, la República Dominicana también sigue preocupada por la persistente inseguridad generada por las actividades relacionadas con las bandas y la proliferación de las armas y municiones ilícitas. La amplia circulación de más de 270.000 armas de fuego ilícitas en manos de civiles y el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras contribuyen al estallido de nuevos disturbios civiles. Por lo tanto, reiteramos que es esencial que se aborde con urgencia la corriente de armas pequeñas y sus municiones.

En ese sentido, valoramos la función de liderazgo de la Comisión Nacional Haitiana para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración en su búsqueda por ayudar a reducir la violencia comunitaria. También encomiamos los esfuerzos realizados por la BINUH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en las esferas de la consolidación de la paz, el control de armamentos y la realización de una evaluación de referencia sobre la vida útil de las armas y las municiones en Haití.

En febrero, antes de la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), más del 40 % de la población de Haití necesitaba ya asistencia humanitaria. Debido al nivel agudo de malnutrición de la población, el país es uno de los más inseguros del mundo desde el punto de vista alimentario. Esa situación, ya de por sí grave, podría deteriorarse aún más durante la temporada de huracanes.

En ese contexto, creemos que es necesario trabajar de consuno con el Gobierno de Haití a fin de establecer mecanismos de evaluación de riesgos y de concebir planes y estrategias más concretos para fortalecer los principales sectores e instituciones. También deben mejorarse los canales de información y colaboración con las comunidades locales a fin de ampliar los mecanismos de alerta temprana con objeto de prepararse para los efectos de los desastres provocados por el cambio climático.

Encomiamos a la comunidad internacional y a otros asociados por haberse comprometido a mitigar la situación humanitaria en el país. El plan de respuesta humanitaria de Haití para 2019-2020 asciende a 253 millones de dólares. A fecha

de 8 de junio, Haití ha recibido tan solo 29,9 millones de dólares. Además de los problemas humanitarios, la economía haitiana afronta múltiples dificultades, que agravarán la situación socioeconómica y frenarán el proceso de recuperación posterior a la COVID-19.

En ese contexto, la República Dominicana pide que se dé una respuesta regional y mundial urgente y coordinada a la pandemia. Nos hacemos eco del llamamiento del Secretario General en favor de que se preste apoyo financiero adicional con el fin de ayudar a Haití a superar sus problemas en materia de desarrollo y de salud.

Para concluir, encomiamos a la BINUH y al equipo de las Naciones Unidas en el país por su respuesta integrada y su labor constante a fin de ayudar a Haití en estas circunstancias extraordinarias, que dificultan aún más el cumplimiento del mandato de la misión.

Coincidimos con el Grupo Asesor Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social en instar al sistema de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y las instituciones financieras internacionales a que adopten medidas conjuntas para evitar la propagación de la COVID-19, mitigar sus efectos humanitarios y socioeconómicos y promover el desarrollo sostenible y la resiliencia ante futuras crisis en Haití.

Anexo V**Declaración de la Misión Permanente de Estonia ante las Naciones Unidas**

Quisiera dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General para Haití, Sra. Helen La Lime, y al Sr. Jacques Létang por sus exposiciones informativas.

A Estonia le preocupan las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Haití, donde la situación humanitaria es ya de por sí grave. Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno de Haití para combatir la pandemia, especialmente la constitución de la comisión multisectorial para la gestión de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se necesitan más medidas y una respuesta nacional coordinada a la pandemia. Los elementos clave para controlar la propagación del virus en Haití son, en primer lugar, aumentar la conciencia pública sobre la COVID-19 y, en segundo lugar, abordar la grave situación de las cárceles y los centros de detención.

Es lamentable que los avances en el proceso político hayan sido marginales. Es preciso redoblar los esfuerzos y asumir una mayor responsabilidad para resolver el actual estancamiento político. El pueblo de Haití merece una vida mejor y más estable.

Animamos a todos a impulsar el proceso político. Es importante mantener un diálogo abierto e inclusivo y demostrar la voluntad política necesaria para encontrar soluciones a las cuestiones más acuciantes de la reforma constitucional. Además, se requiere una mayor claridad en lo que respecta al calendario electoral. Es de suma importancia crear condiciones propicias para la celebración de las próximas elecciones legislativas.

Las crisis políticas y los problemas socioeconómicos actuales ejercen un efecto preocupante en las condiciones de seguridad, ya que allanan el camino para el aumento de las actividades delictivas y de la violencia. La delincuencia relacionada con las bandas sigue suscitando gran preocupación.

Es un hecho alentador que la Policía Nacional de Haití haya demostrado más profesionalidad y moderación en el mantenimiento del orden público.

Durante el período que se examina, aumentó el número de violaciones de los derechos humanos, de abusos y de asesinatos. Es necesario adoptar medidas para luchar contra la impunidad, ya que no se ha avanzado en ninguna cuestión desde la reducción del número de efectivos de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, particularmente en lo que respecta a los sucesos de La Saline y Bel Air. Además, el 74 % de los detenidos siguen a la espera de juicio debido a las largas y complicadas actuaciones judiciales, lo que también ha causado hacinamiento en las cárceles. Destacamos la importancia que reviste mejorar la rendición de cuentas y garantizar que todos los casos se investiguen debidamente y los autores sean llevados ante la justicia.

Por último, quisiera dar las gracias a la Representante Especial La Lime y a su equipo por su labor. Seguimos confiando en que, gracias a sus constantes esfuerzos, el futuro de Haití mejorará.

También solicito que se nos informe sobre la alarmante situación de las cárceles haitianas. ¿Qué medidas han adoptado las autoridades para poner fin a las deficiencias del sistema judicial? ¿Cuáles son las perspectivas, a juicio de la misión, en lo que respecta a la mejora del sistema judicial haitiano?

Anexo VI**Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Francia ante las Naciones Unidas, Anne Gueguen**

[Original: francés e inglés]

Yo también quisiera dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General para Haití, Sra. Helen La Lime, por su exposición informativa, así como al Sr. Jacques Létang, que ha elaborado una clara evaluación de los retos que afronta Haití.

En primer lugar, deseo expresar el apoyo y la solidaridad de Francia con el pueblo y el Gobierno de Haití en los esfuerzos que despliegan para hacer frente a la pandemia de la enfermedad por coronavirus y a sus consecuencias socioeconómicas y humanitarias. Más que en ningún otro lugar, la crisis sanitaria en Haití está agravando la vulnerabilidad existente, en particular la crisis humanitaria que ya afecta a millones de haitianos. La comunidad internacional ha demostrado que está dispuesta a prestar su apoyo. En 2020, Francia contribuirá a la labor del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas en Haití a fin de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria. La Unión Europea ha anunciado la reasignación de 165 millones de euros de ayuda. A cambio, las autoridades haitianas deben brindar garantías de que usarán adecuadamente esos fondos.

Lamentablemente, la pandemia no ha conllevado el fin de la violencia ni de las violaciones de los derechos humanos, sino todo lo contrario. El aumento de la inseguridad y la violencia debido a la actividad de las bandas desde principios de 2020 suscita gran preocupación. La Policía Nacional de Haití está determinada a hacer frente a este problema y debe hacerlo de manera intachable. No cabe tolerar ninguna violación de los derechos humanos. Para restablecer la confianza, las autoridades haitianas deben hacer frente a la impunidad, ante todo en casos simbólicos como las masacres de La Saline y Bel Air, debido a las cuales se han elaborado informes condenatorios sobre las Naciones Unidas. Por último, pedimos a las autoridades haitianas que protejan a los defensores de los derechos humanos, quienes desempeñan un papel crucial en ese contexto.

Frente a la crisis multidimensional en la que se encuentra Haití, todos sabemos que la única solución radica en el diálogo político entre todos los haitianos. Lamentamos que los esfuerzos realizados en febrero en pro de ese diálogo, con el apoyo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), no hayan culminado con la formación de un Gobierno inclusivo. Francia exhorta al Presidente Jovenel Moïse y a todas las fuerzas políticas del país, en particular a la oposición, así como a la sociedad civil y al sector privado, a que reanuden un diálogo nacional inclusivo con objeto de preparar las elecciones y de modificar la Constitución, si ese es el camino elegido por el pueblo haitiano.

Ocho meses después de su creación, la BINUH ha trabajado incansablemente con el equipo de las Naciones Unidas en el país para apoyar a Haití en su respuesta a la pandemia. El Consejo debe permanecer plenamente alerta y adoptar las medidas adecuadas, en especial en caso de que la situación en Haití siga deteriorándose.

Anexo VII

Declaración del Representante Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas, Dian Triansyah Djani

Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de Indonesia y Viet Nam, Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.

Para comenzar, quisiéramos dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Helen La Lime, por su ilustrativa exposición informativa, y a todo el personal de las Naciones Unidas por su dedicación en este difícil momento. También deseo dar las gracias al Sr. Jacques Létang por informarnos sobre los últimos acontecimientos en Haití.

Nos entristece profundamente la falta de progresos que se observa en muchos ámbitos en Haití, según se describe en el informe del Secretario General (S/2020/537). El fracaso del diálogo para llegar a un acuerdo político en febrero fue una enorme pérdida para el pueblo de Haití. A este respecto, quisiera señalar a la atención del Consejo de Seguridad los tres puntos siguientes.

En primer lugar, en lo que respecta a la estabilidad política, consideramos que la incertidumbre y la polarización políticas son las principales causas de la inestabilidad y las dificultades que en múltiples ámbitos enfrenta el país. Es por lo tanto fundamental emprender un diálogo nacional amplio. Apoyamos la colaboración de las Naciones Unidas con el Consejo Electoral Provisional con miras a preservar la integridad del proceso electoral y lograr el objetivo de una cuota del 30 % de mujeres en cargos electos. Un gobierno que no funciona para el pueblo no tiene sentido. Por consiguiente, es importante que todas las partes interesadas en Haití practiquen el diálogo y la colaboración en aras de un futuro mejor para todos los haitianos. Las autoridades haitianas tienen la obligación moral de garantizar a sus ciudadanos el derecho a vivir en un entorno pacífico y estable. Tienen el deber de hacer que eso suceda.

En segundo lugar, en lo que respecta a la seguridad y a los desafíos económicos y sociales, observamos que la criminalidad y las actividades de las bandas de delincuentes, junto con las violaciones y los abusos de los derechos humanos, siguen aumentando. La situación económica ha sufrido conmociones múltiples y simultáneas, y las dificultades se han agudizado como resultado de la desaceleración económica mundial. Además, a pesar de haber registrado algunos progresos, la Policía Nacional de Haití sigue enfrentando graves problemas que pueden limitar su capacidad para actuar. A ese respecto, apoyamos los esfuerzos que se llevan a cabo en el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo en el Fondo para la Consolidación de la Paz, con miras a realizar en Haití una serie de intervenciones socioeconómicas que promuevan la estabilidad y reduzcan la violencia comunitaria y de las bandas de delincuentes. Las autoridades haitianas deben tomar las medidas audaces que sean necesarias para encarar esos problemas, que son un resultado del estancamiento político.

En tercer lugar, con respecto a las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), consideramos que la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla han agravado una situación socioeconómica y humanitaria ya de por sí difícil. Básicamente, los seis puntos de referencia se han visto gravemente afectados por la COVID-19. La enfermedad ha hecho mucho más difícil la celebración oportuna de elecciones, la apertura de oficinas de asistencia jurídica, la búsqueda de soluciones para las desigualdades socioeconómicas y el acceso a la atención de la salud. También ha afectado la exportación de productos básicos haitianos.

En ese sentido, apreciamos la colaboración de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) en el fomento de relaciones constructivas entre el poder ejecutivo y la oposición, e instamos a que se realicen esfuerzos de múltiples

interesados para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Si bien encomiamos la labor de la BINUH, en particular la incorporación de la igualdad de género en su política de contratación y sus actividades, pedimos a la misión y al equipo de las Naciones Unidas en el país que determinen las medidas que es necesario adoptar para encarar los apremiantes problemas de Haití.

Para concluir, quisiéramos expresar nuestro apoyo al llamamiento que formuló el Secretario General a la comunidad internacional, sobre todo, y en primer lugar, a los asociados de la región, para que aumenten el apoyo técnico y político a Haití en estos tiempos difíciles. Indonesia y Viet Nam creen que la estructura regional puede desempeñar un papel importante en la conformación de un nuevo Haití, uno que refleje la sabiduría y las características nacionales y al mismo tiempo sea capaz de hacer frente a las causas fundamentales de los múltiples problemas que afectan al país. La resiliencia regional puede ser un buen catalizador para acelerar la recuperación política y socioeconómica de Haití.

Anexo VIII

Declaración de la Representante Permanente Adjunta de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas, Halimah DeShong

Tengo el honor de formular esta declaración en nombre del Níger, Túnez, Sudáfrica y mi país, San Vicente y las Granadinas (A3+1). Agradecemos a la Representante Especial del Secretario General La Lime su detallada exposición informativa. También agradecemos su exposición al Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Haití, Sr. Jacques Létang. Por último, deseamos expresar nuestro beneplácito por la participación del representante de Haití en esta sesión.

Las exposiciones informativas del día de hoy y el más reciente informe del Secretario General (S/2020/537) demuestran que la situación en Haití es extremadamente grave. La preocupante situación de seguridad, política, humanitaria y socioeconómica imperante se ha agravado como resultado de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y amenaza con empeorar aún más debido a perturbaciones externas como el cambio climático. En el contexto de estos enormes desafíos, y consciente de los que se avecinan, el A3+1 alienta a la comunidad internacional a seguir apoyando a nuestra nación hermana del Caribe y reafirma su apoyo a la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). En ese sentido, deseo hacer las siguientes observaciones.

En primer lugar, el A3+1 sigue profundamente preocupado por la persistencia de los problemas políticos, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones asociadas a las elecciones y a la falta de un calendario electoral. Hacemos notar con preocupación que no se han convocado las elecciones legislativas, ya de por sí atrasadas, y somos conscientes de que el plazo constitucional para la celebración de las próximas elecciones presidenciales está por cumplirse. Instamos a las autoridades haitianas a que adopten las medidas que sea necesario adoptar a fin de garantizar la organización exitosa de esas elecciones en el momento oportuno. A ese respecto, pedimos a los dirigentes políticos haitianos que sigan adelante con la formación de un Gobierno a fin de atraer más apoyo bilateral y multilateral.

El A3+1 también hace hincapié en que no puede haber una solución impuesta desde el exterior a la crisis política, y pide a todas las partes haitianas interesadas que trabajen de manera constructiva para encontrar una solución integral y pacífica a largo plazo. En ese sentido el A3+1 insta también a todos los dirigentes políticos haitianos a entablar un diálogo nacional y a abstenerse de realizar actos que puedan desencadenar más violencia y poner en peligro los logros alcanzados por el país con la guía de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, acogemos con satisfacción el papel que está desempeñando la Comisión Nacional Haitiana para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración y encomiamos los esfuerzos que realiza ese órgano en la elaboración de una estrategia nacional para reducir la violencia comunitaria y mejorar los esfuerzos en la lucha contra la violencia de las bandas. También acogemos con satisfacción los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití para hacer frente al flagelo de la violencia de las bandas en el país. Nos preocupa la proliferación de armas y municiones ilícitas que siguen entrando ilegalmente en el país. Como muchos otros pequeños Estados insulares del Caribe, Haití no fabrica armas de fuego ni municiones. Sin embargo, su ubicación geográfica entre los proveedores y consumidores de estupefacientes ilegales del sur y el norte la convierte en un punto de transbordo de armas ilícitas.

Hacemos notar que la abundancia de armas ilícitas ha desencadenado un aumento del número de delitos, que cometen sobre todo bandas de delincuentes, lo que sigue

generando inseguridad. Nos preocupan profundamente los informes de que un escuadrón de la muerte ha llevado a cabo ataques violentos en varios barrios pobres de Puerto Príncipe. Pedimos que se realice una investigación exhaustiva y se lleve a los autores ante la justicia. En ese sentido resulta alentadora la colaboración entre la BINUH, las autoridades nacionales haitianas y otros interesados pertinentes en la elaboración de una legislación sobre el control de armamentos que se ajuste a las normas internacionales.

Además, el Grupo A3+1 insta a que se fortalezcan las instituciones y los mecanismos de fomento de la capacidad para eliminar las deficiencias institucionales. Reconocemos que se ha avanzado un poco en la Policía Nacional de Haití y en los sectores judicial y penitenciario. Sin embargo, lamentamos que el Estado haitiano haya tenido que reducir su contribución al presupuesto nacional de la Policía Nacional de Haití para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Junto con las instituciones judiciales pertinentes, la Policía Nacional de Haití tiene un papel fundamental que desempeñar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de proteger a sus ciudadanos y asegurar que prevalezcan la transparencia y el estado de derecho.

En tercer lugar, el empeoramiento de la situación humanitaria, en particular el aumento de la inseguridad alimentaria, el hacinamiento en las cárceles y los problemas de las personas más vulnerables, sigue siendo motivo de grave preocupación. A raíz de la pandemia y la crisis socioeconómica consiguiente, es fundamental que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos para ayudar a las autoridades haitianas a responder a la crisis. Encomiamos el espíritu de unidad y solidaridad mostrado por los haitianos en su respuesta inicial a la pandemia. Agradecemos también todas las iniciativas encaminadas a ayudar al país en su respuesta humanitaria a nivel nacional, incluso por conducto de la Comunidad del Caribe, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional para las Migraciones y las Naciones Unidas. Reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno de Haití por cumplir algunos de los parámetros y alentamos a que se siga avanzando en esas importantes esferas.

Además, acogemos con satisfacción las noticias de que algunas instituciones financieras internacionales suspenderán la deuda de Haití para que el país pueda responder adecuadamente a la pandemia de COVID-19, y pedimos a los asociados de Haití que consideren la posibilidad de proporcionar la condonación de la deuda. Haití no solo necesita un alivio de la deuda, sino también necesita donaciones para hacer frente a la ya sombría situación económica prevista por el Fondo Monetario Internacional como las reducciones en las remesas, las exportaciones de textiles y la inversión extranjera directa. Encomiamos el constante compromiso del Grupo Asesor Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social, que apoya la estrategia de desarrollo a largo plazo del país. En estos momentos difíciles, instamos a que se establezca una mayor colaboración entre el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad para fomentar las complementariedades en la labor del sistema de las Naciones Unidas con el país, a fin de eliminar de manera integral las causas fundamentales de la inseguridad de Haití.

Haití sigue siendo un pilar fundamental de nuestra civilización africana y caribeña, con una historia gloriosa pero compleja. Su aparentemente interminable batalla para crear seguridad y estabilidad para su pueblo nos aflige, sobre todo en vista del papel de liderazgo de la nación al sentar las bases para la abolición de la esclavitud. Por ser la primera nación negra que se rebeló contra la esclavitud y la opresión en el hemisferio occidental, Haití pagó un precio exorbitante por su libertad. No podemos abandonar a Haití. Debemos ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas haitianos.

Para concluir, el Grupo A3+1 reitera que el desarrollo sostenible de Haití será una mera ilusión fugaz que se perseguirá y nunca se alcanzará si no se aborda la génesis del subdesarrollo de ese país, y ello debe comenzar por una restitución adecuada.

Anexo IX

Declaración del Coordinador Político del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas, David Clay

Agradezco a la Representante Especial del Secretario General La Lime y al Sr. Létang sus exposiciones informativas.

Acogemos con satisfacción el segundo informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) (S/2020/537). El Reino Unido reconoce las enormes dificultades por las que atraviesa Haití desde la última sesión del Consejo de Seguridad para examinar la cuestión de la BINUH (véase S/PV.8729). Deseo comenzar expresando nuestro agradecimiento por la ardua labor de los dirigentes y el personal de la misión en medio de circunstancias cada vez más difíciles.

Formularé tres breves observaciones. En primer lugar, el Reino Unido considera que una respuesta coordinada y holística a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) es fundamental. En segundo lugar, se deben adoptar ya medidas urgentes para fortalecer los derechos humanos y la rendición de cuentas. En tercer lugar, elaborar una hoja de ruta para romper el interminable estancamiento político es hoy más importante que nunca.

En primer lugar, en cuanto a la COVID-19, es evidente que la pandemia presenta un grave riesgo para Haití, tanto por el efecto de la propia enfermedad como por sus efectos secundarios. A medida que se afianzan los efectos sanitarios, humanitarios y económicos de la crisis, es fundamental que las autoridades haitianas y la comunidad internacional den una respuesta coordinada y holística. El Reino Unido se siente alentado por la rápida adaptación del sistema de las Naciones Unidas a la situación sobre el terreno, y exhortamos al Representante Especial Adjunto del Secretario General en particular, que también funge de Coordinador Residente y Coordinador Humanitario, a que trabaje en estrecha colaboración con las autoridades haitianas para ayudar a orientar un enfoque coordinado.

En segundo lugar, en cuanto a los derechos humanos y la rendición de cuentas, el Reino Unido sigue preocupado por la falta de progresos. El que los autores de las masacres de La Saline y Bel Air sigan evadiendo la justicia socava profundamente los esfuerzos por fomentar la confianza en el estado de derecho. También lamentamos que el Gobierno de Haití aún no haya cumplido el compromiso que asumió de nombrar a un Ministro de Derechos Humanos. Ese nombramiento sería una valiosa demostración de la voluntad política de Haití de salvaguardar los derechos humanos.

Por último, en cuanto al actual estancamiento político, el Consejo de Seguridad y los dirigentes de las Naciones Unidas, reunión tras reunión, han tratado de alentar a las partes en Haití a que elaboren una hoja de ruta para romper el estancamiento político y la parálisis institucional. Como señala el Secretario General en su informe, el fracaso en febrero de las iniciativas de diálogo encaminadas a alcanzar un acuerdo sobre la hoja de ruta necesaria para las reformas constitucionales, institucionales y estructurales hizo que se perdiera otra oportunidad.

La COVID-19 ha agravado los riesgos existentes para la estabilidad de Haití. La economía se tambalea. Las elecciones se avecinan. Ahora más que nunca, todas las partes deben unirse en interés de la nación. El diálogo amplio e inclusivo es fundamental.

Anexo X**Declaración de la Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Kelly Craft**

Agradezco a la Representante Especial del Secretario General La Lime y al Sr. Jacques Létang que hayan esclarecido la situación en Haití.

Como todos sabemos, la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha ejercido una gran presión sobre el ya frágil sistema de salud de Haití. Las noticias de los ataques a los pacientes de COVID-19, y a las instalaciones médicas que los tratan, son profundamente preocupantes, ya que el miedo y la desconfianza solo empeorarán la situación.

En estos tiempos difíciles, los Estados Unidos están junto a Haití. Hasta la fecha, nos hemos comprometido a aportar más de 16 millones de dólares en asistencia para apoyar las iniciativas de Haití en la lucha contra la COVID-19.

Debido a que el pico de infecciones por COVID-19 en Haití aún no ha llegado, es fundamental que todos los haitianos trabajen de consuno para limitar la propagación del virus. Observamos con preocupación la propagación de la COVID-19 dentro de las hacinadas prisiones del país, y pedimos al Gobierno de Haití que cumpla plenamente su decisión de 27 de marzo de poner en libertad a los detenidos en prisión preventiva acusados de delitos menores y a los presos vulnerables desde el punto de vista médico que están a punto de cumplir sus sentencias. Llegó el momento de actuar, no de hablar.

Es igualmente importante que el Gobierno continúe su labor sobre las reformas políticas, económicas y sociales necesarias. El discurso del Presidente Moïse formulado el 18 de mayo en el que subrayó su compromiso de celebrar elecciones es un paso positivo, y alentamos al Gobierno de Haití y a todos los agentes políticos a que lleguen a un acuerdo político y encuentren una forma de avanzar, en beneficio, sobre todo, del pueblo haitiano.

Tomamos nota de los logros alcanzados por la Policía Nacional de Haití al proseguir sus esfuerzos encaminados a hacer frente a la violencia de la comunidad y las bandas y a reducir los secuestros. La Inspección General de la Policía Nacional de Haití ha actuado de manera positiva para mejorar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos, lo que constituye un paso positivo hacia una mayor transparencia. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, el hecho de que se siga sin proporcionar a la Policía Nacional de Haití los recursos necesarios pone en peligro los logros que tanto le ha costado conseguir. Una vez más, ha llegado el momento de actuar, no solo de hablar.

También debemos expresar nuestra preocupación ante el hecho de que los autores de violaciones de los derechos humanos, incluso en La Saline y Bel Air, no rinden cuentas por sus actos. Se deben tomar medidas para evitar que se consolide un clima de impunidad.

Por último, a medida que Haití responde a la pandemia y a los factores subyacentes de inestabilidad, es esencial fortalecer el estado de derecho y poner fin al flagelo de la corrupción. Estamos escuchando al Sr. Létang y compartiendo sus preocupaciones, a la vez que apoyamos a los ciudadanos de Haití. Me corresponde decir al Presidente Moïse y a todos los dirigentes políticos de Haití que ya es hora de que pongan a un lado sus diferencias y de que se unan para edificar instituciones sólidas que garanticen un futuro más próspero y seguro para todos los haitianos.

Anexo XI**Declaración del Encargado de Negocios Interino de Haití ante las Naciones Unidas, Patrick Saint Hilaire**

[Original: francés e inglés]

Le agradezco, Sr. Presidenta, esta oportunidad de exponer las opiniones y observaciones del Gobierno de la República de Haití sobre el documento S/2020/537.

Aprovecho esta oportunidad, al comienzo de mi declaración para expresar mis mejores deseos de éxito a la Presidencia francesa del Consejo de Seguridad durante el mes de junio de 2020. También aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los miembros del Consejo por sus comentarios tan pertinentes y su solidaridad con mi país, Haití, en su búsqueda de estabilidad política, progreso social y desarrollo a largo plazo.

En nombre del Presidente de la República de Haití, el Excmo. Sr. Jovenel Moïse y del Gobierno encabezado por el Primer Ministro Joseph Jouthe, así como en el mío, reitero la solidaridad de la República de Haití con todos los Estados miembros del Consejo que se han visto gravemente afectados por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta pandemia ha demostrado de manera innegable lo interconectados que están los países y los pueblos de nuestro mundo. Los sufrimientos indecibles que la pandemia ha infligido a la humanidad han puesto de relieve la necesidad de que los Estados Miembros y todos los que forman parte de las Naciones Unidas, en este año crucial del 75° aniversario, apliquen estrategias y políticas para la renovación del sistema internacional con determinación, persistencia, solidaridad y determinación.

En ese contexto, encomio los esfuerzos que realizan los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas, los donantes multilaterales, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales para seguir actuando de manera colectiva a fin de contener lo antes posible esta pandemia y mitigar sus consecuencias socioeconómicas y de otro tipo.

En lo que respecta al segundo informe del Secretario General sobre la implementación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), permítaseme asegurar al Consejo que el Gobierno de Haití ha examinado cuidadosamente el informe. Las observaciones del Secretario General que figuran en los párrafos 49 a 57 reforzarán y fomentarán la cooperación entre el equipo de las Naciones Unidas en Haití y las autoridades haitianas. Es importante señalar que la BINUH siempre podrá contar con la colaboración de Haití para llevar a cabo las tareas específicas que se le asignen en virtud de la resolución 2476 (2019).

Agradezco a la Representante Especial del Secretario General en Haití, Helen La Lime, su presentación del informe del Secretario General y su visión general de los acontecimientos que han tenido lugar en Haití en las últimas semanas. Hago extensivo mi agradecimiento al Representante Especial Adjunto, Coordinador Residente y Coordinador de Asuntos Humanitarios en Haití, Bruno Lemarquis, y a todos los miembros del equipo de las Naciones Unidas que llevan a cabo sus tareas respetando la dignidad del pueblo haitiano y de conformidad con la visión estratégica y las prioridades definidas por el Gobierno de Haití. Es fundamental que la BINUH siga trabajando de esa manera en la ejecución de su mandato en estricto cumplimiento del segundo párrafo del preámbulo de la resolución 2476 (2019), en el que el Consejo de Seguridad reafirma “su decidido compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Haití”.

Asimismo, acojo con satisfacción la participación en esta sesión del Consejo del abogado y Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Haití, Jacques Létang. El Gobierno atribuye especial importancia a la colaboración con todas las partes interesadas en aras de ofrecer soluciones duraderas a los problemas actuales y emergentes del país. Esos problemas conciernen a todos los agentes de la vida política, económica y social de la nación; por lo tanto, es preciso que entre ellos prevalezca el espíritu de colaboración. Se insta a las organizaciones de la sociedad civil a desempeñar un papel más importante y disciplinado en los esfuerzos por garantizar la independencia del sistema judicial haitiano y en la promoción y el respeto de los derechos humanos fundamentales y el estado de derecho.

He tomado debida nota de las cuestiones planteadas por el Sr. Létang en nombre de la Federación de Colegios de Abogados de Haití y, sobre todo, de las preocupaciones que ha expresado.

En lo que respecta a la justicia y la seguridad, el país enfrenta desafíos multifacéticos. El tráfico clandestino de armas pequeñas y armas ligeras constituye una verdadera plaga. Esas armas son responsables de numerosos actos de violencia, abusos flagrantes y muertes en varias localidades del país. Las bandas armadas también siguen siendo un problema y un importante motivo de preocupación. La violencia de las bandas armadas y los enfrentamientos violentos entre grupos armados rivales, son motivo de sufrimientos indiscutibles e intolerables para todas las capas de la población haitiana. Para hacer frente a los problemas de seguridad es necesario fortalecer de manera continua la capacidad de la Policía Nacional de Haití. Por otra parte, es preciso hacer mucho más en pro del fortalecimiento del sistema de justicia y de la eficacia de los tribunales, a fin de garantizar la imparcialidad y el castigo de los responsables de actos de violencia.

Además, el Gobierno está especialmente interesado en mejorar la situación del personal que trabaja en el sistema penitenciario, así como de todos los detenidos.

El Gobierno reconoce y es plenamente consciente de la gravedad de la crisis que afecta el orden público en Haití y seguirá movilizando a todos los agentes del sector de la seguridad para enfrentar y erradicar esa amenaza. Nos satisface que en el informe del Secretario General se destaquen los progresos registrados en la ejecución de reformas claves que buscan facilitar el cumplimiento de las importantes misiones encomendadas a al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El Gobierno sigue actuando con decisión y resiliencia a la hora de abordar las causas de la desigualdad social, la corrupción, la pobreza, la inseguridad alimentaria, los problemas económicos y la falta de acceso a la atención de la salud. En el actual entorno mundial caracterizado por crisis multifacéticas, Haití ha identificado varios elementos que son esenciales para el éxito de sus esfuerzos de recuperación, a saber, la existencia de voluntad política, ambición, asociación, solidaridad y recursos financieros sustanciales. El apoyo y la asistencia financiera a Haití deben ser coherentes con las necesidades específicas de la población, en particular de la población más vulnerable. También deben ser coherentes con la apremiante necesidad de fortalecer las principales instituciones nacionales. En este momento, el Gobierno necesita con toda urgencia recursos adicionales, tanto técnicos como financieros, para encarar las numerosas crisis a las que de manera simultánea debe hacer frente el país.

El Gobierno ha tomado nota con interés de las preocupaciones expresadas por el Secretario General en el párrafo 3 del informe en relación con la ausencia de una asamblea legislativa funcional y la falta de claridad sobre el calendario de las próximas elecciones y las reformas constitucionales y estructurales necesarias.

Si bien es innegable que se han logrado progresos en Haití desde el examen del primer informe del Secretario General sobre la ejecución del mandato de la BINUH

(véase S/PV.8729), aún queda mucho por hacer para liberar al país de la inestabilidad y las crisis actuales. No obstante, la lentitud de los progresos es atribuible a las constantes divisiones políticas, a las dificultades para entablar un diálogo genuino, transparente y centrado en el país y, en la actualidad, a la propagación de la COVID-19 en el país.

Todos los sectores de la nación deben hacer los sacrificios necesarios para contener la propagación de la enfermedad por coronavirus, contribuir a la creación de un calendario electoral realista y emprender, con decisión y de consuno, el camino de las grandes transformaciones necesarias para la estabilidad, la recuperación y el desarrollo a largo plazo del país. De ahí la necesidad de un amplio diálogo nacional.

El diálogo nacional no estriba en realizar un mero ejercicio político, sino que se trata de una necesidad impuesta al país a consecuencia de la polarización lamentable y desenfrenada de las principales partes interesadas de la nación. Es en ese marco de un diálogo genuino donde se deben restablecer los numerosos vínculos necesarios para la reconstrucción y la recuperación nacionales. Ese es, sin duda, el espíritu que imbuye las diversas iniciativas que el Presidente ha puesto en marcha desde su llegada al poder. Aún hoy, el Gobierno hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la nación y también solicita la intensificación del apoyo del sistema de las Naciones Unidas y de otros asociados internacionales con objeto de volver a entablar, sobre bases sólidas, el diálogo indispensable sobre las cuestiones principales que revisten interés nacional.

No se puede lograr nada extraordinario ni duradero si no se respetan los valores fundacionales de la República de Haití y los principios ineludibles en los que se basa el régimen democrático establecido en la Constitución haitiana. Existe una necesidad real de llevar a cabo una reforma constitucional en la que se puedan tener en cuenta los hechos y realidades del país y eliminar, de una vez por todas, las ambigüedades de algunas de sus disposiciones que a menudo han sido objeto de numerosas críticas. La reforma constitucional y la organización de elecciones libres y democráticas para la renovación de los dirigentes políticos son elementos esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones nacionales. En los párrafos 7 y 8 del informe del Secretario General se destacan los esfuerzos realizados por las autoridades haitianas, con el apoyo de los asociados internacionales, en pro de la reforma de la Constitución y de la organización de las próximas elecciones. Desgraciadamente, no es fácil avanzar al ritmo deseado en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El Gobierno de Haití acoge con beneplácito el énfasis que se hace, en las secciones VI y VII del informe, en el deterioro de la situación socioeconómica de Haití y en las nuevas emergencias derivadas de la pandemia de COVID-19. Hoy más que nunca, Haití debe desarrollar una mejor concienciación en lo relativo a las causas fundamentales de las dificultades y a las necesidades específicas de su población. En efecto, la situación socioeconómica del país se ha deteriorado considerablemente bajo los efectos combinados de la prolongada crisis política, la estrategia *peyi lòk* y los desastres naturales recurrentes.

No debemos perder de vista que en los últimos diez años el país se ha visto afectado con dureza por el devastador terremoto acontecido el 12 de enero de 2010, los ciclones, la sequía, las inundaciones, la epidemia de cólera y —algo que deploraremos siempre— la falta de coherencia de muchos agentes nacionales e internacionales. Es en medio de este difícil contexto en el que la pandemia de la enfermedad por coronavirus se ha propagado en el país. Ya se están sintiendo sobremanera sus repercusiones en los medios de vida de la población, especialmente de los jóvenes, las mujeres y otros grupos vulnerables. La economía nacional se enfrenta a perturbaciones múltiples y simultáneas, entre las que se incluyen la reducción de los ingresos fiscales, el aumento del gasto en respuesta a la crisis, la disminución de la inversión extranjera directa y las

exportaciones, y la reducción de las remesas y las contribuciones multifacéticas de la valiente y altruista diáspora haitiana. El sector informal ya está pagando un alto precio.

La crisis sanitaria debilita aún más la capacidad del país para responder a la crisis humanitaria y a las perturbaciones climáticas, en particular durante la temporada de huracanes de junio a noviembre, que ya se nos ha echado encima.

Actualmente, el número de casos confirmados de COVID-19 va claramente en aumento. A 16 de junio, el número total de infecciones confirmadas ascendía a 4.688, incluidos 141 nuevos casos y 82 muertes, y la tasa de mortalidad es del 1,7 %.

El Gobierno de la República ha adoptado una serie de medidas para luchar contra la propagación de la pandemia de COVID-19 en el país, entre las que figuran la creación de estructuras técnicas y administrativas para gestionar la pandemia, una amplia campaña de prevención a través de la concienciación, el fomento de la capacidad, la adquisición de equipo y material médico y un aumento considerable del presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y Población. Nos alienta constatar que varios Estados Miembros y entidades de las Naciones Unidas, a las que se hace referencia en los párrafos 35 y 36 del informe, así como algunas organizaciones no gubernamentales, se han adherido al enfoque conocido como “Alerta temprana – Acción temprana”. El Gobierno también ha adoptado varias medidas en favor de los jóvenes, los desempleados, los profesionales, las empresas y otros grupos o sectores.

La gestión de la pandemia de la enfermedad por coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia que reviste que el país mejore la preparación para las crisis, así como la continuidad de la recuperación y del desarrollo. También constituye un indicio de los cambios necesarios, tanto en la gobernanza de los países vulnerables como en las modalidades de la asistencia internacional. Hoy más que nunca, la ayuda a Haití es una cuestión que requiere de atención y reflexión estratégica. No debemos perdernos en el contexto de la respuesta a la COVID-19 y a la crisis humanitaria. Tengamos en cuenta las principales enseñanzas extraídas de las modalidades y del nivel de la ayuda proporcionada al país tras el devastador terremoto de 12 de enero de 2010. No sigamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Tengo presente la importante máxima de que errar es humano, pero recaer en el error es diabólico.

En el contexto actual, Haití necesita urgentemente recursos adecuados y previsibles para superar un gran número de problemas, a saber, la crisis sanitaria y sus consecuencias, la crisis humanitaria, las condiciones de vida de la población, la celebración de elecciones democráticas, la corrupción y la impunidad, la proliferación de las armas de fuego y la proliferación de las bandas armadas.

Por último, quisiera transmitir aquí el urgente llamamiento en favor de una mayor solidaridad y flexibilidad que el Presidente Moïse hizo a los donantes bilaterales y multilaterales con ocasión de la reciente reunión de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo, que se celebró por videoconferencia. Se necesitan determinación, solidaridad y flexibilidad para financiar las respuestas de emergencia, las actividades de recuperación y las iniciativas de desarrollo sostenible que nos permitan ganar —juntos— la batalla contra la pandemia de la COVID-19 y contra sus consecuencias socioeconómicas y adoptar otras medidas decisivas para superar los desafíos actuales en Haití.